

culacion fué en juegos que como todos los de azár, los prohíbe terminantemente el derecho: que adminículos de la clase que caracterizaron el sumario instruido, no bastan para imponer á sus autores pena corporis afflictiva; razon por la que el promotor, con fundamento de las leyes 4ª tít. 17, lib. 9, de la N. R., tít. 16, lib. 17, del mismo código y la 26 tít. 19 partida sétima, solicitó el sobreseimiento en la causa y todo lo demas que en hecho y en derecho debió tenerse presente y ver convino. Este tribunal en grado de revision debia confirmar y en efecto confirma, por sus propios y legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el ciudadano juez de Distrito de Veracruz el 20 de Enero de este año, y por la que sobrescuyó en la causa que seguia contra Bernardo Barradas, Hilario Moreno y Guillermo Morales como presuntos portadores de moneda falsa; poniéndose á estos en libertad. Hágase saber, y expidiéndose la ejecutoria de castilo al juzgado de Distrito de Veracruz; elévese la causa á la 1ª Sala de la Suprema Corte de Justicia para su revision. El ciudadano magistrado de este Tribunal superior de Circuito así lo mandó y firmó; doy fé—*José Mª Cantá.*
—*Ignacio Mercado.*

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El procurador general de la nacion dice: que en el juzgado de Distrito de Veracruz se instruyó causa contra Bernardo Barradas, Hilario Moreno y Guillermo Morales, por circulacion de moneda falsa. De las diligencias del sumario apareció, que en el patio de una casa en donde se celebraba un baile, hubo un juego de albures, en el que circularon varios reales, que reconocidos por peritos, resultaron ser falsos; pero aunque aparecen presunciones de que quien los circuló fué Barradas, no hay sobre este punto una prueba eficaz en su contra. Por

tal motivo el juez de Distrito dictó un auto de sobreseimiento, que ha sido confirmado por el tribunal de Circuito de Puebla. Habiendo pues causado ejecutoria y no apareciendo motivo para responsabilidad, el procurador general pide se dé por revisado el proceso.

México, Marzo nueve de mil ochocientos setenta y dos.—*L. Guzman.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo once de mil ochocientos setenta y dos.

Por revisada y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el tomo.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis Mª Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo diez y nueve de mil ochocientos setenta y dos.—*Alejo Gomez Eguarte.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Michoacan, por el C. Lucas Rodriguez, contra el C. prefecto de Morelia que lo consignó al servicio de las armas, con violacion, segun el quejoso, de garantías individuales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Lucas Rodriguez se queja de que el C. prefecto de esta ciudad le aprehendió, y lo agregó como soldado al cuerpo de caballería núm. 1; sin decirle por qué se le privó de su libertad, quién fué su acusador, y en fin, sin habérsele juzgado como reo de algun delito determinado.

El C. prefecto en su informe manifiesta,

que aprehendió al expresado Rodríguez por acusarle de ladrón la fama pública; pero que no ha procedido á formar ninguna causa criminal contra aquel.

Así pues, lejos de aparecer justificado el procedimiento de la prefectura, por el contrario, el informe corrobora los acertos del reo, y se ve claramente que el C. prefecto ha violado las garantías que otorga la carta fundamental de 1857 á los CC.; puesto que habiéndose aprehendido á Rodríguez como reo de un delito común, no le ha juzgado en los términos que debiera, sino que como pena de un delito no comprobado, le ha consignado al servicio militar.

No apoyan el procedimiento del C. prefecto las disposiciones legales que cita, porque ellas se contraen á casos diversos, y la ley que suspendió algunas garantías, no se extendió hasta el punto de que á un reo del orden común se le castigase sin juzgársele previamente, y sin oírsele en defensa.

Es cierto que en caso de interés público nacional todo individuo puede ser obligado á prestar trabajos personales, mediante una justa retribucion; pero entre este caso y el que nos ocupa hay una diferencia enorme.

En efecto; si el C. prefecto hubiera manifestado que por urgente necesidad de interés público se habia obligado á Rodríguez á prestar un servicio personal, seria aplicable la prescripcion legal que cita; pero cuando manifiesta que aprehendió á Rodríguez por señalarle como ladrón la fama pública, debió haber procedido á juzgarle si estaba en sus facultades, ó á consignarle á la autoridad competente para que lo hiciera; mas nunca debió, tratándose no de un simple C. cuyo trabajo personal se necesitaba, sino de un reo acusado por delito determinado, haberse esquivado de juzgarle, y como pena agregarle á un cuerpo de caballería.

En esta virtud, y puesto que no hay puntos de hecho que ameriten prueba; porque, como se ha visto, el C. prefecto no niega los hechos á que se contrae el quejo-

so, sino antes bien los corrobora; y únicamente se limita á disculpar su conducta con las disposiciones legales que aduce, este ministerio pide se declare que la justicia de la Union ampara á Lucas García de los procedimientos del C. prefecto de esta capital, por haberse violado en su persona las garantías que conceden á los acusados los artículos 20 y 21 de la Constitucion general de la República; disponiéndose se consigne al reo á la autoridad que deba juzgarle, segun la naturaleza de su delito, ó lo juzgue el mismo C. prefecto si para ello es competente; deteniéndole y aprisionándole en el lugar respectivo, si hay méritos para ello, y separándole del cuerpo de caballería á que indebidamente se ha agregado.

Morelia, Marzo primero de mil ochocientos setenta y dos.—*Mariano de Jesus Torres.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

Morelia, Marzo primero de mil ochocientos setenta y dos.

Visto este juicio de amparo de garantías promovido por Lucas Rodríguez, vecino del pueblo de Jaricuaró, contra el C. Prefecto de esta capital por haberlo destinado al servicio de las armas en el 8º cuerpo de caballería permanente: Visto el informe de la autoridad responsable; lo pedido por el C. promotor; la citacion para sentencia y cuanto mas ver convino; y

Considerando: que el C. prefecto no niega el hecho motivo de la queja y solo expone como fundamento del procedimiento, la fama pública que á su juicio acusa al quejoso de ladrón y cita en apoyo de esta providencia el art. 1º de la ley general de 2 de Diciembre de 1871 que suspende ó modifica algunas de las garantías concedidas al hombre por el código fundamental de la república:

Considerando: que el hecho motivo de la queja es una notoria violacion de aquellas

consignadas en los artículos 5º, 16, 19 y 20 de la Constitución federal, pues si bien están suspensos ó modificados por la disposición citada, no es de una manera absoluta, sino en los casos y forma que designan los relativos de la ley de 17 de Enero 1870, y en el presente el C. prefecto no ha destinado á Rodríguez al servicio de las armas como caso de interés público nacional, sino como pena ó medida preventiva por estar aquel indicado de ladrón de pública voz y fama; y si bien es cierto que la citada autoridad tiene facultades bastantes para reprimir aquel delito y para proveer á la seguridad de las personas y propiedades, tambien lo es que esto debe ser sin agravio de las formas tutelares de la defensa y la libertad de los ciudadanos, en el modo y forma establecidos en las leyes; por que si la fama lo denunció al quejoso como ladrón debió prenderlo y juzgarlo como tal, si estaba en sus facultades, ó consignarlo á su juez para ser juzgado; pero nunca incorporarlo al ejército nacional, como por via de pena ó medida precautoria, sin que precediese el juicio respectivo y la defensa del acusado.

Considerando en fin: que los hechos alegados por Rodríguez y no desmentidos por el C. prefecto, constituyen una violación de las garantías otorgadas por los artículos citados de la ley fundamental, como pide el C. promotor y con apoyo de los artículos 1º, 23 y 27 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, se declara:

Primero; la justicia de la Union ampara y protege á Lucas Rodríguez contra la providencia del C. prefecto de esta ciudad que consignó al quejoso al servicio de las armas, con violación de los artículos 5º, 16, 19 y 20 de la Constitución general.

Segundo; restitúyanse las cosas al estado que tenían antes de la violación, juzgándose á Rodríguez conforme á las leyes ó consignándolo al juez competente.

Tercero; sáquense copias de este fallo y remítanse á quienes corresponda. Hágase saber y dese cuenta con las actuaciones á la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Definitivamente juzgando lo decretó el C. juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo trece de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Michoacan por el C. Lucas Rodríguez, contra las providencias de la prefectura de la capital en virtud de las cuales fué consignado al servicio de las armas, motivado este hecho en que se le acusaba de ladrón, de fama pública, estimando con las referidas providencias, violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 5º 16, 19 y 20 de la carta federal de la República. Vistas las constancias de autos y

Considerando: que la gefatura política motivó su providencia en la fama que dice tener el peticionario de ladrón, de cuyo delito solo puede conocer la autoridad competente, el hecho de la consignación importa una violación expresa de las garantías consignadas en su escrito de demanda: por estos fundamentos se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juez de Distrito de Morelia, en los términos siguientes:

Primero; la justicia de la Union ampara y protege á Lucas Rodríguez contra la providencia del C. prefecto de Morelia que consignó al quejoso al servicio de las armas, por las razones expresadas en el informe de dicha autoridad.

Segundo; restitúyanse las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consignándose á Rodríguez á su juez competente.

Devuélvanso sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Marzo veintisiete de mil ochocientos setenta y dos.—*Agustín Peralta,* oficial mayor.

CRIMINAL

Causa seguida en el juzgado 2º de Distrito de México, contra D. Pascual Miranda, por falsa amonedación.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL DEL JUZGADO DE DISTRITO.

C. juez.

El promotor dice: que en virtud de lo dispuesto por la superioridad con relacion á lo que afecta la presente causa á D. Pascual Miranda se han practicado nuevas diligencias, de las que ha tenido que imponerse el que suscribe examinando su contenido; habiendo visto como es natural y examinando previamente por segunda vez este proceso, en el cual no ha encontrado aun con las diligencias practicadas nuevamente motivo legal bastante para la culpabilidad ó delincuencia del expresado Miranda por haberse encontrado en la parte de su casa que arrendó á D. Antonio Cuadriello el volante; pues como tiene ya expuesto el que suscribe en su pedimento anterior de fojas 128 y 129 de esta causa, solo éste, es

decir, Cuadriello aparece delincente; en consecuencia cree, que no habiendo mérito para que se le imponga pena al repetido Miranda, se le debe absolver del cargo.

México, Agosto veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Moctezuma.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Agosto veintitres de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la presente causa formada contra D. Pascual Miranda y Antonio Cuadriello por falsa amonedación; vistas las diligencias del sumario; el auto del sobreseimiento que con relacion al primero de los reos pronunció este juzgado; la confesion con cargos formulada á Cuadriello; lo pedido por la parte fiscal; la sentencia pronunciada en 15 de Diciembre de 1870; lo determinado por la superioridad revocando el sobreseimiento y mandando se reciba confesion con cargos al referido Miranda con relacion á los puntos indicados por el propio tribunal; vistas las diligencias que á virtud de la revocacion se han practicado por este juzgado; así como la confesion con cargos, alegato del defensor C. Lic. José M. Batiz y pedimento fiscal y visto en fin lo que debía;

Considerando, respecto al referido Miranda que es á quien exclusivamente debe contraerse el presente fallo: que de las diligencias nuevamente practicadas y de la confesion con cargos no resulta circunstancia alguna que compruebe ó corrobore su responsabilidad por la tenencia del volante aprehendido, y en consecuencia, dé mérito para la condenacion ó aplicacion de pena alguna, pues muy al contrario se han aclarado con mayor exactitud las diferencias que en concepto de la superioridad existian en las respectivas declaraciones de Miranda y Cuadriello; que subsistiendo en opinion de este juzgado las mismas razones de hecho y legales que se tuvieron presentes para determinar el sobreseimiento, las que de con-